

Santiago, uno de abril de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero. Que comparece Directv Chile Televisión Limitada, en adelante DIRECTV, representada por sus abogados, deduciendo recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 18.838 en contra de la resolución dictada por el Consejo Nacional de Televisión (en adelante “CNTV”) que le impuso una multa de 21 UTM.

Señala que, con fecha 26 de diciembre de 2022, el CNTV acordó formular cargos en contra de Directv, por infringir el artículo 5 de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión, al exhibir el día 20 de octubre de 2022, entre las 19:15:17 y las 21:00:40 la película Monster Asesina en Serie, en horario de protección de los niños y niñas menores de 18 años a través de su señal A&E y teniendo en cuenta que esa actuación “afectaría la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud”.

Estima que el recurso de apelación que ha deducido debe ser acogido por varias consideraciones.

En primer lugar, porque habría existido una afectación al principio de legalidad; en la medida en que la facultad de fiscalización del CNTV y las disposiciones que consagran sus infracciones constituyen leyes penales en blanco, que resultarían contrarias a este principio. Estima que, atendidas las amplias potestades del CNTV y que se le encomienda de manera genérica el “correcto funcionamiento de los servicios”, quedaría entregado a su arbitrio la determinación de lo que constituye o una infracción. Tampoco existiría, en su entender, información ni el mecanismo preventivo necesario que le permita al apelante conocer con certeza y anticipación la calificación de las películas o programas que emiten los proveedores de contenido, y que no se encuentra disponible para los operadores de TV paga un listado de aquellas películas o programas calificados por el Consejo de Calificación Cinematográfica como no aptas para menores de 18 años, ni el CNTV cuenta con un listado, link o información que permita obtener en forma actualizada las películas que han sido objeto de sanción.

En segundo lugar, porque se habría infringido el derecho constitucional de libertad de expresión. Dice que las interpretaciones que formula el CNTV en relación con el contenido de ciertas películas no pueden implicar una censura o castigo por la exhibición de material que se encuentra disponible



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YXKZXTXVNR

en otras plataformas; y que no puede desentenderse de la imposibilidad de proteger a los menores de ciertos contenidos, teniendo además en cuenta los derechos de los niños que reconoce la Convención de los Derechos del Niño. Estima que la colisión entre el derecho a la libertad de opinión e información y la tutela de los derechos del niño no debe resolverse con una sola regla, sino que ponderarse cuidadosamente en concreto. Agrega, además, que la sanción y castigo por contenidos en señales abiertas o satelitales es ineficaz frente a la difusión y disponibilidad de una serie de contenidos por internet que podrían, incluso con mayor fuerza, vulnerar las normas del correcto funcionamiento antes señaladas; de manera que las fiscalizaciones que realiza el CNTV no serían eficaces,

En seguida, porque se habría sancionado a su representada sin que concurra la culpabilidad necesaria para que se estime procedente algún reproche. Ello porque sostiene que DIRECTV no puede censurar contenidos de la programación de manera previa, en la medida en que no es dueña de las señales que retransmite. Considera que resulta improcedente imponerle una sanción, toda vez que faltaría la concurrencia de un requisito esencial para configurar una infracción que legitime el ejercicio del *ius puniendi* estatal, y que exige la concurrencia de culpa, en la medida en que la responsabilidad no es objetiva. Dice que, a su respecto, no existe una conducta exigible distinta que no implique incurrir en gastos excesivos para el desarrollo de su actividad económica, pues solo se limita a retransmitir las señales, y una revisión constante de la parrilla programática de cada señal, teniendo en cuenta las diferencias que existen en cada país dependiendo del origen del canal, además de la eventual existencia de errores de programación por parte del prestador, entre otras circunstancias, excede con creces el grado de culpa que le resulta exigible.

A continuación, argumenta que no corresponde que se cuestione a la permissionaria por la transmisión de contenidos del mismo tenor que los que se encuentran en otras plataformas y toda vez que los que pueden acceder libremente los niños y jóvenes, teniendo en cuenta su autonomía progresiva. Dice que si bien es importante proteger a los niños de contenidos que pudieran ser atentatorios contra sus derechos, esa protección no puede implicar el absurdo que se sancione a DIRECTV porque en internet y redes sociales existe y se difunde el mismo contenido por cuya exhibición se les



sanciona; de manera tal que la sanción que se impone no se puede estimar idónea para los fines perseguidos por el legislador.

Agrega que el artículo 33 N°2 de la Ley 18.838 carece de la precisión necesaria para satisfacer las exigencias del principio de proporcionalidad, lo que afectaría la legitimidad para imponer la sanción de multa en caso de que se determine su responsabilidad. Estima que dada la forma amplia en que se ha consignado la facultad sancionadora del CNTV, los criterios que aplica la autoridad no serían suficientes, pues no se observan en la argumentación razones de fondo que permitan determinar cuál fue el criterio utilizado para determinar el quantum de la sanción más allá de la mera enunciación de que se trataría de una infracción leve. Concluye que la multa impuesta no es fruto de la aplicación de estándares objetivos uniformes y razonables, sino que de mera discrecionalidad.

Señala, además, que la Resolución N°591 del Consejo Nacional de Televisión y que dicta normas para la determinación de la cuantía de las multas sería inconstitucional, pues establece criterios cuestionables, tales como si el contenido fue grabado previamente, la reincidencia, y que tampoco precisa en qué consiste la colaboración del infractor y cómo se materializa. Establece que esa resolución buscó solucionar el problema de inconstitucional de que adolecían las disposiciones de la Ley 18.838, pero no toma en cuenta que las penas y su gradualidad deben estar establecidas en las leyes y no en un acto administrativo. Con ello excedería, además, el marco de la potestad reglamentaria de ejecución.

Solicita tener por interpuesto recurso de apelación en contra de la resolución del CNTV que impuso a DIRECTV una multa de 21 UTM, mediante el Oficio Ordinario N°334, decidiendo, en definitiva, desestimar la sanción en razón de los vicios procedimentales de los que adolece; o, en su defecto, rebajar la sanción a la de amonestación.

Segundo. Evacuando su informe, el CNTV señaló que inició, de oficio, una fiscalización por la transmisión por parte de DIRECTV de contenidos que pugnan con el horario de protección de niños, niñas y adolescentes. En concreto, que el 20 de octubre de 2022, en la señal A&E, canal 1207, se habría exhibido la película Monster- Asesina en Serie, lo que procedió a fiscalizar, emitiéndose un informe técnico que propuso al Consejo formular cargos por la presencia, en la emisión, de elementos audiovisuales



inapropiados que ponen en riesgo la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, toda vez que la película fue calificada por el Consejo de Calificación Cinematográfica como no apta para menores de 18 años de edad.

Es por ello que acordó formular cargos al operador referido por infringir el artículo 1 de la Ley 18.838, al no respetar el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, así como por la inobservancia del artículo 5 de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión, y por la afectación del bien jurídico formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud consagrado en el artículo 1 inciso cuarto.

Indica que, notificados los cargos, la recurrente no formuló descargos dentro de plazo y no aportó ningún medio probatorio que desvirtuare la transmisión de dichos contenidos en el horario citado.

Que, por ello, en la sesión de 15 de mayo de 2023 el CNTV acordó ratificar lo obrado en la fiscalización e imponerle una sanción de 21 UTM según el criterio de gravedad de la infracción establecido en el artículo 33 de la Ley 18.838 y los parámetros que establece la resolución N°610 de 2021 sobre Adecuación de Normas Generales para la aplicación de la sanción multa, tomando en cuenta su alcance territorial nacional y que no presenta reincidencias en la misma infracción en los doce meses previos, como se indica en el Considerando Vigésimo Segundo del acuerdo.

Como fundamento de la sanción se encuentra que, al haber sido transmitida esa película por la permisionaria en un horario de protección, se amagó el principio de protección de niños, niñas y adolescentes, al presentar escenas especialmente violetas y contenidos cruentos, además del recurrente consumo de alcohol y tabaco, de manera que el contenido de este filme es inapropiado, y puede resultar negativo para su desarrollo y proceso formativo, incluido su proceso de socialización. Que ello se reafirma por el hecho de que la película fue calificada para mayores de 18 años de acuerdo con el Consejo de Calificación Cinematográfica con fecha 1 de abril de 2004. Agrega que, la misma permisionaria reconoce, antes de emitir el contenido, que este es inadecuado para los menores de edad, porque al inicio de la emisión de la película se establece una advertencia que da cuenta que la programación no es recomendada para menores de 15 años, lo que daría



cuenta no solo de la previsibilidad de la infracción, sino que también de la responsabilidad de esta en los hechos imputados.

Señala que la permissionaria exhibió la película dentro del horario de protección, infringiendo la segregación horaria que contempla de manera expresa el artículo 5 de ese cuerpo normativo. Considera relevante también la disposición del artículo 12 letra l) de la Ley 18.838, que establece que el Consejo debe dictar las normas generales destinadas a impedir que los menores se vean expuestos a programación y publicidad que pueda dañar seriamente su salud y su desarrollo físico y mental, pudiendo fijar horarios para la exhibición de programación no apta para menores de edad; del mismo modo que el artículo 13 letra b) de la Ley 18.838, que dispone que el Consejo debe determinar la hora a partir de la cual pueda transmitirse material fílmico calificado para mayores de 18 años por el Consejo de Calificación Cinematográfico.

Indica que, de ese modo, el núcleo de la conducta sancionadora fue precisado con base en el principio de colaboración reglamentaria, pues el artículo 5 del Reglamento consagra de manera clara y precisa que la conducta proscrita es transmitir, dentro del horario de protección aludido, material fílmico calificado como no apto para ser visto por menores de 18 años de edad por el Consejo de Calificación Cinematográfica.

Aduce que, esa carga pública es exigible tanto a los concesionarios de radiodifusión televisiva de libre recepción como a los permissionarios de servicios limitados de televisión, lo que habilita al Consejo a proteger la indemnidad de la formación de los niños con independencia de la naturaleza jurídica del emisor y de las relaciones contractuales que sustenten su actividad.

Agrega que, el bien jurídico de formación espiritual e intelectual de la niñez y juventud, cuya puesta en peligro motivó la fiscalización, se encuentra en línea con los tratados de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, materializando los contenidos del interés superior del niño, obligando a los órganos públicos a tener siempre presente el bienestar y los derechos fundamentales de estos, adelantando las barreras de protección para su resguardo. Asimismo, que desde la óptica de la dimensión social de la libertad de expresión que se encuentra ínsita en la labor del CNTV y que le fija otorga límites, esa transmisión –por sus características y el hecho de



haber sido practicada en horario de protección– dejó de estar amparada por esta garantía y devino en abusiva, y con ello afectó la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud y el interés superior del niño, teniendo en cuenta la particular influencia que ejerce la televisión en esas audiencias.

Agrega que es el CNTV quien opera como intérprete calificado por la propia Carta Fundamental, a posteriori de las emisiones, de los límites de la libertad de expresión en relación con la protección de los derechos fundamentales de las audiencias; y que el legislador le encomendó la facultad de llenar de contenido ese principio en los casos que involucran la transmisión de contenidos que las dañan, y que esa es la razón de la técnica legislativa utilizada por el artículo 1 de la Ley 18.838, a saber, la consagración directa de valores que la propia Carta Fundamental protege con una amplitud suficiente para llenar de contenido a través del tiempo esas valoraciones, tanto a través de la potestad reglamentaria como en las propias decisiones debidamente fundadas del Consejo. Es por ello también que el CNTV no aplica un catálogo de sanciones preestablecido, sino que las valoraciones caso a caso en base a conceptos dinámicos y esencialmente mutables en el tiempo, conforme con el despliegue de la cultura y sus valoraciones sociales.

Se refiere, a continuación que, la resolución que se impugna, cumplió con el grado de fundamentación derivado de las garantías del debido proceso y la Ley 19.880, que en todas las fases del procedimiento la permisionaria tuvo la posibilidad de defenderse, pero que ni en el procedimiento administrativo –en el que no presentó descargos dentro del tiempo legal– ni en el presente recurso, ha logrado desvirtuar su responsabilidad infraccional, pues no controvertió la transmisión de los contenidos en el horario de protección de menores, ni la calificación para mayores de edad de la película exhibida, ni solicitó la apertura del término probatorio o aportó alguna prueba.

Dice que se refirió también a la determinación proporcional de la multa impuesta, porque se tuvo en cuenta que lo sancionado es una conducta que pone en riesgo la formación de los menores de edad, por lo que debe estimarse grave y teniendo en cuenta que la permisionaria realiza su exhibición con alcance nacional, debiendo tenerse en cuenta también que no contaba con reincidencias dentro de los últimos doce meses anteriores a la emisión. Todo ello dando estricto cumplimiento a la determinación de la gravedad de la infracción y los parámetros que fija la resolución N°610 de



2021 sobre la adecuación de normas generales para la aplicación de la sanción de multa, definiéndose como leve, y aplicándose una multa de 21 UTM, equivalente al 2,1% de lo permitido por el artículo 33 N°2 de la Ley 18.838, por lo que se habría ajustado a derecho.

Sostiene que debe ratificarse la multa impuesta, porque se mantiene plenamente vigente la presunción de legalidad que ampara la sanción dictada por el CNTV.

Agrega que la emisión de la película sancionada, dado su contenido, calificación y el horario en que fue transmitida, configura una infracción al principio del correcto funcionamiento de la televisión, lo que ha sido ratificado reiteradamente por la jurisprudencia de los tribunales.

Niega la infracción a los principios de legalidad y tipicidad, en la medida en que la técnica legislativa adoptada por la Ley 18.838 faculta a que el CNTV complete en cada caso, por la vía de sus decisiones, el contenido de las conductas que afectan los bienes jurídicos que establece la ley, lo que permite que esas decisiones se ajusten a la mutación cultural, lo que sería admitido por nuestra Constitución Política de la República y validado por el Tribunal Constitucional.

De este modo, agrega, la conducta infraccional que permite perseguir la responsabilidad de los canales es siempre la misma: transmitir contenidos que amaguen el principio del correcto funcionamiento por la vía de la lesión o puesta en peligro de los derechos fundamentales y la formación de niños, niñas y adolescentes, normas que deben ser complementadas por el artículo 13 letra b) de la Ley 18.838 y la regla del artículo 5 de la Norma General NGCET.

Aduce que la fuente normativa del deber de segregación horaria se encuentra en la Convención de los Derechos del Niño, en armonía con las disposiciones contenidas en el artículo 5 y 6 de la Constitución Política de la República, además de en los artículos 12 letra l) en relación con el artículo 12 letra b) de la Ley 18.838, en todas las cuales se contiene el núcleo legal esencial de la obligación que se ha exigido a Directv. Bajo cualquier respecto, estima que esta no es la sede para cuestionar la supuesta generalidad o vaguedad de los conceptos de la Ley 18.838, puesto que se trata de un recurso de reclamación por ilegalidad administrativa, destinado a controlar si



al momento de dictar el acto administrativo que impuso sanción, el CNTV ha actuado dentro del marco que la Constitución y la ley establecen.

Agrega que la alegación de que faltaría un mecanismo preventivo de entrega de información para cumplir con su obligación desconocería la regulación de la televisión y la prohibición de censura previa. Señala que el CNTV no puede entregarle un listado de películas calificadas por el Consejo de Calificación Cinematográfica porque no dispone de ellas, al no ser el organismo que, de acuerdo con la Ley 19.846, califica el mencionado material. En cualquier caso, que la información sobre las sanciones que ha aplicado el CNTV sobre diversas películas es de acceso público y está disponible en el sitio web de ese organismo, de manera que pueden ser consultadas por cualquiera; y, en cualquier caso, porque el Consejo de Calificación Cinematográfica establece en su sitio web las calificaciones de las películas, dentro de las cuales se encuentra la exhibida por la recurrente. Finalmente, agrega que, al responsabilizar a CNTV por la supuesta ausencia de información previa, la permisionaria demuestra que sí tiene la posibilidad de intervenir su programación o incidir en aquella que pacta con los proveedores de contenidos.

Argumenta que, en la imposición de la sanción, no se atenta contra la libertad de expresión, porque esa garantía tiene límites constitucionales, supraconstitucionales y legales asociados a la protección de los derechos fundamentales de las audiencias. Descarta, por inverosímil, la alegación de Directv referida a la autonomía progresiva de los derechos de los niños, argumentando que esa autonomía no hace perder de vista el principio de interés superior del niño, y que la Ley 18.838 da cuenta de ello respetando el proceso de desarrollo del ser humano en el período de la infancia y la adolescencia. De este modo, que nada relacionado con la autonomía progresiva implica dejar de sancionar el riesgo creado por Directv al exhibir la película o restar valor a las barreras de protección que el Estado ha diseñado para tales efectos. Del mismo modo, descarta que la existencia de otras plataformas que transmitirían los mismos contenidos y que harían ineficaz la fiscalización del CNTV, eximan a la recurrente de respetar la normativa vigente, teniendo además en cuenta que la televisión reviste caracteres especiales que justifican en régimen especial al que se encuentra sometido.



Añade, a continuación que, la evaluación de la concurrencia de culpa no se ajusta al régimen sancionatorio de la Ley 18.838, el que de acuerdo con el artículo 13 hace exclusiva y directamente responsable a la permisionaria de cualquier contenido, nacional o extranjero, que transmita o retransmita, de manera que bastará con que esta infrinja el deber de cuidado que le impone la ley para que incurra en responsabilidad infraccional. La culpa infraccional sería, por consiguiente, suficiente para que concurriera aquella requerida para la imposición de la sanción, y que esta no se elimina por la circunstancia de que se entreguen mecanismos de control parental, reafirmando el carácter de infracción de peligro que exhibe aquella que se imputa cometida a la recurrente.

De esta manera, que el artículo 13 de la referida ley, introduce una regla de responsabilidad directa por el riesgo creado, sin que se requiera demostrar la concurrencia de un perjuicio efectivo para que se configure la infracción.

Agrega que la sanción impuesta ha respetado el principio de proporcionalidad de las sanciones administrativas, el que resulta satisfecho por el sistema sancionador previsto en el Título V de la ley, teniendo en cuenta la norma del artículo 33 de la Ley que dispone que las infracciones a ese cuerpo legal serán castigadas según la gravedad de la infracción, y teniendo en cuenta el bien jurídico puesto en peligro con la conducta desplegada por la actora, el alcance nacional de la permisionaria, el que no poseía reincidencias, y habida cuenta del rango de la multa que resultaba aplicable. Resalta que aquella impuesta lo fue prácticamente en su mínimo legal, siendo equivalente al 2,1% de lo permitido.

Reitera que sancionó una falta grave y comprobada, aplicando una sanción proporcional y de acuerdo con las normas vigentes; no procediendo la rebaja o modificación de la sanción impuesta pues los tribunales carecerían de competencia para ello conociendo de una reclamación. Agrega que tampoco existiría arbitrariedad en la imposición de la sanción del caso, pues el CNTV se habría limitado a aplicar lo dispuesto en el artículo 33 de su Ley Orgánica, respetando el principio de juridicidad; alegaciones todas que habrían sido sistemáticamente rechazadas por los tribunales.



Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores solicita tener por informado recurso de reclamación y rechazarlo en todas sus partes, con costas.

Tercero. Que, con fecha 17 de enero de 2024, la secretaria del Tribunal Constitucional notificó la suspensión dispuesta en los autos rol 14875- INA sobre recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 33 N°2 y 34 de la Ley 18.838 en el presente procedimiento.

Se tomó conocimiento, con posterioridad, de la sentencia del Tribunal Constitucional que, por mayoría, rechazó el requerimiento de inaplicabilidad deducido por DIRECTV, dejando sin efecto la suspensión de este procedimiento.

Cuarto. Que cabe tener presente que el inciso segundo del artículo 34 de la Ley 18.838: “La resolución que imponga amonestación, multa o suspensión de transmisiones será apelable ante la Corte de Apelaciones de Santiago (...) la apelación deberá interponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución, ser fundada y para su agregación a la tabla, vista y fallo se regirá por las reglas aplicables al recurso de protección”.

Quinto. Que la resolución del CNTV en contra de la que se reclama es aquella contenida en el Oficio N°334 de 2023, que comunica a DIRECTV la decisión de imponerle la multa de 21 UTM contemplada en el artículo 33 N°2 de la Ley 18.838, por infringir, a través de su señal A &E, Canal 1207, el artículo 5 de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión con la exhibición el día 20 de octubre de 2022 a partir de las 19:15:17 horas, la película “Monster- Asesina en Serie”, en horario de protección de niños y niñas menores de 18 años, no obstante su calificación para mayores de 18 años, efectuada por el Consejo de Calificación Cinematográfica.

Sexto. Para efectos de resolver el presente recurso, debe considerarse que no existe controversia en relación con los hechos relevantes, en la medida en que la apelante reconoció que exhibió la referida película, que la misma tiene una calificación para mayores de 18 años de edad, y que ello tuvo lugar en la fecha y en el horario que se mencionan en la resolución recurrida.



Séptimo. Que la apelante ha cuestionado la sanción impuesta por consideraciones que dicen relación con el principio de legalidad que regiría en materia administrativa sancionadora, toda vez que no se encontraría suficientemente determinada la infracción por la que se la sanciona. En seguida, porque con ella se estaría afectando el derecho a la libertad de expresión, porque se le estaría sancionando sin que medie culpabilidad en su actuación, porque no habría mediado daño o lesión al bien jurídico protegido; y por carecer de determinación y proporcionalidad la multa impuesta.

Octavo: Que, de acuerdo con la Ley N° 18.838, el CNTV tiene dentro de sus competencias “velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión que operan, u operen a futuro, en el territorio nacional” (artículo 1 inciso 1°) definiendo la misma ley qué por correcto funcionamiento de estos servicios debe entenderse como “el permanente respeto, a través de su programación, de la democracia, la paz, el pluralismo, el desarrollo regional, el medio ambiente, la familia, la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, los pueblos originarios, la dignidad humana (...)” (inciso cuarto).

Con tal finalidad, se encomienda a esta autoridad “su supervigilancia y fiscalización, en cuanto al contenido de las emisiones que a través de ellos se efectúen, salvo en las materias técnicas normadas y supervisadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones”.

En concreto, en lo que dice relación con su competencia, establece el artículo 12 letra I) que: “EL Consejo dictará las normas generales para sancionar la transmisión de programas que contengan violencia excesiva, trulencia, pornografía o participación de niños o adolescentes en actos reñidos con la moral o las buenas costumbres. Asimismo, el Consejo deberá dictar las normas generales destinadas a impedir que los menores se vean expuestos a programación y publicidad que pueda dañar seriamente su salud o su desarrollo físico o mental” agregando en los incisos siguiente que “se considerará como circunstancia agravante el hecho que la infracción se cometa en horas de transmisión a las que normalmente tenga acceso la población infantil”. Se agrega que “tales normas deberán incluir la designación de horarios dentro de los cuales se podrá exhibir programación no apta para menores de edad, la que estará, en todo caso, precedida de una advertencia visual y acústica o identificada mediante la presencia de un símbolo visual durante toda su duración”, disponiéndose a continuación que



“el incumplimiento de lo dispuesto en los incisos precedentes será sancionado de acuerdo a lo establecido en el número 2 del inciso primero del artículo 33 de esta ley”.

Del mismo modo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la misma Ley se dispone que el CNTV no podrá intervenir en la programación de los servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción ni en la de los servicios limitados de televisión, pudiendo, no obstante “b) determinar la hora a partir de la cual podrá transmitirse material fílmico calificado para mayores de 18 años de edad por el Consejo de Calificación Cinematográfico”.

Noveno. De las disposiciones antes transcritas queda de manifiesto que es la propia Ley 18.838, la que consagra como infracción la exhibición de un contenido que no sea apto para un menor de edad en el horario protegido; de ahí que el núcleo de lo prohibido y que fue sancionado en el presente caso, ha sido previsto por una norma de rango legal, no advirtiéndose, en consecuencia, una infracción al principio de legalidad que se denuncia.

Que la circunstancia que normas de rango infralegal complementen en sus aspectos específicos la referida prohibición, no resulta constitutivo de una infracción al principio de legalidad en su dimensión de taxatividad, sino que una expresión de una técnica legislativa que persigue asegurar que las referidas reglas se encuentran en condiciones de asegurar su vigencia y su capacidad para tutelar los bienes jurídicos que se encomiendan al CNTV.

En lo que dice relación ahora con la sanción impuesta por la resolución recurrida, queda de manifiesto que ella ascendió a 21 UTM, encontrándose en el límite inferior del marco legal que establece el propio artículo 33 N°2. Sin perjuicio de ello, que el CNTV la impuso teniendo en cuenta, la gravedad del hecho a la luz del bien jurídico protegido por la norma, y criterios de proporcionalidad que la misma norma establece, tales como, el alcance nacional del proveedor de contenidos y otros que resultan en general relevantes para establecer en concreto una sanción como sucede con la reincidencia. Tales criterios, por lo demás, han sido aplicados en la forma dispuesta por la Resolución N°610 Exenta sobre Adecuación de Normas Generales para la aplicación de la sanción de multa, publicada en el Diario Oficial de 7 de julio de 2021, en la que el propio CNTV, dentro del marco legal, delimita la forma en que aplicará en concreto las sanciones aplicables.



De lo dicho queda en evidencia que no se advierte una lesión al principio de legalidad en lo dice relación con la conducta infractora, ni tampoco con la sanción impuesta.

Décimo. Respecto de la pretendida afectación a la libertad de expresión que alega la recurrente, debe consignarse que ella no se produce, en la medida en que no puede estimarse como tal, la conducta consistente en infringir los límites que la propia ley ha estimado aplicables para el ejercicio de esta garantía fundamental, y que tienen como fundamento la tutela de niños, niñas y adolescentes.

Undécimo. Que, en lo que dice relación con la afectación al principio de culpabilidad en la conducta atribuida, debe tenerse en cuenta la norma expresa contenida en el artículo 13 de la Ley 18.838, de acuerdo con la cual “los concesionarios de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción serán exclusiva y directamente responsables de todo y cualquier programa, nacional o extranjero, que transmitan, aun cuando se trate de transmisiones o retransmisiones vía satélite”.

Por su parte, el artículo 5 de las Normas Generales sobre Contenidos de la Emisión de Televisión, publicadas en el Diario Oficial de 20 de agosto de 1993, en que se dispone que: “los concesionarios de servicios de televisión deberán establecer los procedimientos concordantes con la ley y con las Normas Generales dictadas por el Consejo y disponer los mecanismos de control y resguardo que impidan efectivamente la ocurrencia de emisiones que contengan violencia excesiva, truculencia, pornografía o participación de niños o adolescentes en actos reñidos con la moral o las buenas costumbres. Los concesionarios deberán informar al Consejo sobre los procedimientos adoptados dentro de los noventa días posteriores a la publicación de estas normas en el Diario Oficial. En el caso de los nuevos concesionarios, el plazo señalado se contará desde el inicio de sus actividades. Los concesionarios informarán sobre cualquiera modificación posterior a los procedimientos establecidos, en el plazo de treinta días contados desde su adopción. La omisión en establecer tales procedimientos, la falta de concordancia de estos con la ley o con las Normas Generales dictadas por el Consejo, o su incumplimiento, serán consideradas como circunstancias agravantes de las conductas que se sancionen”.



De las referidas disposiciones queda en evidencia que dentro del ámbito de cuidado que deben desplegar los concesionarios se encuentra la exhibición de cualquier contenido en sus plataformas, aunque se trate de transmisiones o retransmisiones vía satélite, lo que exige que implementen un conjunto de resguardos destinados a impedir emisiones que pongan en riesgo a niños, niñas y adolescentes.

En la especie, debe tenerse en cuenta que la recurrente no acreditó haber implementado tales medidas de resguardo, como tampoco la ocurrencia de hechos que podrían estimarse constitutivos de caso fortuito y que la eximan de responsabilidad.

En lo que dice relación con esta cuestión, sus alegaciones se han limitado a cuestionar el diseño de la norma que le asigna responsabilidad, lo que, en ningún caso, la exime de responsabilidad por su incumplimiento; razón por la que serán desestimadas.

Duodécimo. En cuanto a que la actuación del CNTV sería ineficaz para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes porque existirían otras plataformas que ponen a disposición de estos contenidos similares, deberá, asimismo, rechazarse.

La sola circunstancia que un mismo bien jurídico sufra peligro por otras conductas diversas de aquella que sanciona una norma, no conlleva consigo que esta última, no merezca o necesite sanción. Ello resulta, por lo demás, acorde con su protección fragmentaria, lo que caracteriza de manera general la tutela que brinda el ordenamiento jurídico a tales bienes valiosos.

Décimo Tercero. Que, por último, respecto de la pretendida afectación al principio de proporcionalidad, de lo ya analizado, puede concluirse que la sanción impuesta por el CNTV lo fue dentro del marco legal; y, además, dentro del límite fijado para una infracción leve; prácticamente en el monto mínimo de esta clase de infracciones, habiéndose justificado, en concreto, la aplicación de esa cuantía teniendo en cuenta circunstancias objetivas tales como la gravedad de la infracción, el alcance nacional de la misma, y la ausencia de reincidencia; de ahí que no se advierta la desproporción o arbitrariedad denunciadas.

Décimo Cuarto. Que, en consecuencia, no se advierte de las circunstancias examinadas, que concurren, en la especie, los vicios o



defectos denunciados al momento de recurrir, razón por la que la apelación deducida deberá ser rechazada.

Con lo expuesto, disposiciones legales citadas y lo previsto en el artículo 19 N°12 de la Constitución Política de la República y los artículos 1, 12, 13, 33 y 34 de la Ley 18.838, se resuelve: Que **se rechaza, sin costas**, la apelación deducida por Directv Chile Televisión Limitada en contra de la resolución contenida en el Oficio Ordinario N°334 dictada por el Consejo Nacional de Televisión.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante María Soledad Krause Muñoz.

Contencioso administrativo N°385- 2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YXKZXTXVNR

Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Marisol Andrea Rojas M., Carolina S. Brengi Z. y Abogada Integrante Soledad Krause M. Santiago, uno de abril de dos mil veinticinco.

En Santiago, a uno de abril de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YXKZTXVNRR